



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 19 de marzo de 2026

VISTO:

El caso **FMP 15677/2022/1/CA1**, caratulado "Legajo de apelación de Felice Hnos. SRL por infracción ley 27.430", del registro de la Secretaría Penal de esta Cámara Federal de Apelaciones, elevado por el Juzgado Federal 1 de Azul, Secretaría 4;

Y CONSIDERANDO:

El doctor Eduardo Pablo Jiménez dijo:

Que la presente causa llega nuevamente a estudio de esta Alzada en virtud de lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto decidió "...HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, CASAR y ANULAR la resolución recurrida, y remitir el proceso al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a derecho. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN)."

En primer término, es dable recordar que la causa se inició en virtud de la denuncia presentada por representantes de la División Jurídica de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva (AFIP) contra "Felice Hnos." SRL CUIT 30-7716453-7 por la presunta comisión del delito de evasión simple respecto del Impuesto a las Ganancias del período 2018.

En ese contexto es que se presentó el abogado defensor de los socios investigados (Pedro César Felice y Analía Valentina Felice) y solicitó la suspensión de la acción penal con motivo del acogimiento a un plan de facilidades de pago. En consecuencia, el 04/05/2023 el Aquo dictó la suspensión del trámite de la causa hasta que el contribuyente acreditara el cumplimiento de lo acordado con el Fisco. Asimismo, el 24/06/2024 el letrado defensor acompañó la documental pertinente que comprobaba la cancelación total del plan de pagos suscripto por su asistido.

En base a ello, el Aquo declaró la extinción de la acción penal por la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias -período 2018- de la firma "Felice Hnos. SRL" y

Fecha de firma: 19/03/2026

Alta en sistema: 20/03/2026

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: FRANCISCO MANUEL PEREYRA, SECRETARIO



#39842771#492068958#20260318114938578

decretó el sobreseimiento de Pedro César Felice en los términos del art. 16 de la ley 27.430 y el de Analía Valentina Felice, por no haber participado de la conducta investigada.

Ante esta resolución, el abogado defensor interpuso recurso de aclaratoria -con apelación en subsidio- cuestionando que la extinción de la acción penal debió realizarse en los términos de la ley 27.743, art. 5 y no por el régimen de la ley 27.430 referido por el Aquo, puesto que ese beneficio solo se puede utilizar por única vez.

El Juez de primera instancia en la resolución dictada el 21/03/2025 rechazó el recurso impetrado por el letrado con el fundamento en que el art. 5 de la ley 27.743 establece que no se permite regularizar las obligaciones mediante compensaciones, y en el informe de ARCA acompañado en estos autos surge que el contribuyente regularizó parte de su deuda de esa manera.

Es por eso que el abogado recurrió ante esta Alzada argumentando que su defendido no pretendió adherirse al régimen de regularización de la ley 27.743 dado que al momento que se sancionó tal normativa (el día 8/07/2024), ya no presentaba deuda para regularizar en dicha moratoria, sino que debía aplicarse el párrafo respecto a las obligaciones canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que prevé la extinción de la acción penal de pleno derecho para esos casos.

En el traslado conferido al Fiscal General, el Dr. Daniel E. Adler refirió que al haberse cumplido con totalidad el plan de pago a la fecha y existiendo una nueva ley que permite mejorar la situación de la firma imputada, debe aplicarse la normativa 27.743, por el principio de la ley penal mas benigna.

En la resolución dictada el 24/09/2025 por este Tribunal se resolvió rechazar el recurso interpuesto por la defensa, en tanto, se fundó en que el régimen de regularización de la ley 27.743 prevé que la adhesión al mismo debe realizarse conforme las condiciones que la Administración estableció al momento de reglamentar la referida normativa, y no en el marco de esta instrucción.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Por esos motivos, es que el letrado de Pedro Felice, recurrió tal decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y argumentó en su escrito que el régimen del art. 16 de la ley 27.430 es voluntario, requiere el inequívoco pedido del contribuyente, y en este caso, su defendido se negó expresamente.

Además, consideró que es absurda la interpretación del art. 5 de la ley 27.743, pues el plan de pago anterior a la entrada en vigencia de la normativa ya fue cancelado, por lo que no se pretende adherir a la moratoria de la nueva ley, en tanto, es materialmente imposible al no existir deuda.

En ese sentido, es que el Tribunal ad quem consideró que lo resuelto por esta Alzada en el interlocutorio del 25/09/2025 debía anularse pues "... Como se adelantó, el texto del artículo 5 de la ley 27.743 (8/7/2024), diferencia claramente entre quienes se "acogen" al régimen (párrafo 1) y la situación de las obligaciones "canceladas con anterioridad" a la entrada en vigencia del régimen (párrafo 3). Para este último grupo, la ley usa la fórmula "quedará extinguida de pleno derecho", lo que implica operatividad automática en sede judicial una vez verificado el pago, sin supeditarse a trámites de adhesión, a la par que, a diferencia del artículo 16 del RPT, no prevé el efecto de utilización del beneficio por una única vez. Es decir que el artículo 5 de la ley 27. 743 crea dos vías de extinción de la acción penal: la "vía de adhesión" (para deudas impagas) y la "vía automática" (para obligaciones ya canceladas), a la vez que no consume la posibilidad del artículo 16 de la ley 27.430, constituyéndose, entonces, en la ley penal más benigna para el caso y, por ende, de aplicación de pleno derecho por imperativo de la ley específica y aquellas de rango constitucional (arts. 2 del C.P. y 9 CADH y 15 PIDCP)". (voto del Dr. Gustavo M. Hornos)

Por su parte, el Dr. Javier Carbajo añadió que "...Tal como señala el colega preopinante, la cláusula del artículo 5 estipula expresamente que "(t)ambién quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha...". Esta decisión



busca evitar colocar a los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones, de manera anterior a la vigencia del régimen y sin la perspectiva cierta de obtener la extinción de la acción penal, en una situación más gravosa en contraste con aquellos que regularizan sus obligaciones con aquella representación. En el caso, la aplicación de aquella disposición opera de pleno derecho y no requiere ni demanda la realización del trámite que la decisión adoptada parece reclamar ni su encuadre en los términos del invocado art. 16 del Régimen Penal Tributario”

- La opinión del suscripto:

Para comenzar, he de recordar que en mi anterior intervención -reflejada en el voto que encabezó la resolución que a la postre fuera dejada sin efecto por la decisión casatoria-, sostuve que no correspondía aplicar la ley 27.743 en tanto no estaban cumplimentados los recaudos exigidos por la RG 5525/2024 a fin de la adhesión a la regularización de la deuda del contribuyente.

Sin embargo, el Tribunal Superior resolvió anular la decisión de esta Alzada por considerar, por una parte, que debía diferenciarse dentro de la normativa la “vía de adhesión” y la “vía automática” que prevé la ley para las obligaciones canceladas con anterioridad a su vigencia y que, en ese caso, la acción penal se extinguía de pleno derecho en tanto no existiera una sentencia condenatoria.

Y por otro lado, debía aplicarse el principio de la ley penal mas benigna, pues la normativa prevista en la ley 27.430 que se pretendía aplicar al caso, permitía utilizar el beneficio una única vez y la reforma de la ley 27.743 no establece este límite.

Es así que siguiendo los lineamientos presentados por el Tribunal de Casación, los que han de servir de suficiente fundamento para la nueva decisión a adoptarse, corresponde adherir a tal interpretación.

Mas allá de ello, debo señalar que con la reciente modificación legislativa en la materia al promulgarse la ley 27.799 el 31/12/2025, ha perdido virtualidad el debate analizado respecto a si correspondía aplicar el régimen de la ley 27.430 o de la ley

Fecha de firma: 19/03/2026

Alta en sistema: 20/03/2026

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: FRANCISCO MANUEL PEREYRA, SECRETARIO



#39842771#492068958#20260318114938578



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

27.743, pues la primera de las normas modificó el art. 1 de la ley 27.430, elevándose el monto de la evasión para que constituya un delito, señalando que: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de pesos cien millones (\$100.000.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se, tratase de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año .Para los supuestos de tributos locales, la condición objetiva de punibilidad establecida en el párrafo anterior se considerará para cada jurisdicción en que se hubiere cometido la evasión”.

En efecto, ya se ha dicho que esta investigación se inició por las declaraciones juradas engañosas de la empresa “Felice Hnos. SRL” CUIT 30-70716453-7 sobre el Impuesto a las Ganancias del período 2018 por un monto de \$2.250.282,40, lo que en su momento fue encuadrado como prima facie constitutivo del delito de evasión simple conforme el art. 1 de la ley 27.430 (que establecía que el importe evadido debía exceder \$1.500.000).

Ahora bien, con la actual reforma de la norma tributaria es evidente que el monto por el que presuntamente se evadió en este caso es sustancialmente menor al que prevé la nueva ley 27.799 para que la acción u omisión constituya delito, por lo que no existe una acción típica antijurídica y culpable que sea pasible de una sanción penal.

Por estas razones, y sin desconocer lo señalado por el Tribunal de Casación en la resolución dictada el 26/12/2025 respecto a la amnistía penal que correspondería al caso, es claro que la reforma normativa influye en las circunstancias de la causa, en tanto la acción realizada por la denunciada ya no constituye un delito que amerite un perdón penal conforme el art. 61 CP.

Es pertinente destacar que este Tribunal ya dicho que “... Por aplicación del PRINCIPIO DE LEGALIDAD contenido en la Constitución Nacional, la ley aplicable



al delito —desde el punto de vista temporal— es la ley vigente al momento de comisión del hecho punible. No obstante la modificación introducida en la legislación de fondo, torna imperativa para el sentenciante su aplicación en razón de constituir una excepción al principio de irretroactividad, en virtud de ser la ley, una norma penal más benigna para la situación de los imputados, ya que sus efectos operan de pleno derecho. (...) Acompaña esta tesitura la doctrina sosteniendo: “...la ley penal más benigna no es sólo la que desincrimina o establece una pena menor, pues (a) puede tratarse de la creación de una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, de un impedimento a la operatividad de la penalidad, etc; (b) puede provenir también de otras circunstancias, como el menor tiempo de prescripción...” (cfr. Zaffaroni – Alagia – Slokar, Derecho Penal, parte general, 2ª edición, Ediar 2002, pág. 121).” Sentencia del 29/03/2022, en la causa FMP 4808/2020/1/CA1

En consecuencia, estimo que por razones de economía procesal corresponde que esta Alzada aplique el art. 336 inc. 3 CPPN, en tanto los hechos investigados no encuadran en una figura legal, por lo que debe dictarse el sobreseimiento de la persona investigada.

Por esas razones, y luego de la nulidad dictada por el Tribunal Casatorio, corresponde REVOCAR el auto recurrido conforme el art. 336 inc. 3 CPPN, en tanto el hecho investigado no encuadra en una figura legal, por lo que corresponde dictar el sobreseimiento de Pedro Cesar Felice.

Tal el sentido de mi voto.-

El doctor Alejandro Osvaldo Tazza dijo:

Expuestas por mi distinguido colega las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan su decisión, adelanto que comparto sustancialmente las consideraciones allí desarrolladas, así como la solución jurídica que propone.

En primer término, corresponde recordar que la presente causa llega ~~nuevamente a conocimiento de esta Alzada en virtud de lo resuelto el 26 de diciembre~~

Fecha de firma: 19/03/2026

Alta en sistema: 20/03/2026

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: FRANCISCO MANUEL PEREYRA, SECRETARIO



#39842771#492068958#20260318114938578



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

de 2025 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que al hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa dispuso casar y anular la resolución dictada anteriormente por esta Cámara Federal de Apelaciones y remitirlas para el dictado de un nuevo pronunciamiento.

Ahora bien, tal como lo señalara mi colega preopinante, con posterioridad a dicha decisión se produjo una nueva modificación legislativa en la materia mediante la sanción de la ley 27799 (31 de diciembre de 2025), que reformó el artículo 1 de la ley 27.430 elevando sustancialmente el monto mínimo exigido para la configuración del delito de evasión tributaria.

En ese contexto normativo, el monto que se atribuye como presuntamente evadido en autos -correspondiente al impuesto a las ganancias del período fiscal 2018 por la suma de \$2.250.282,40- resulta notoriamente inferior al umbral actualmente establecido para la configuración del tipo penal, circunstancia que torna atípica la conducta investigada.

Frente a ello, y de conformidad con el principio de aplicación de la ley penal más benigna consagrado en el artículo 2 del Código Penal, corresponde concluir que el hecho investigado ha perdido relevancia penal, lo que torna procedente la solución propiciada por mi colega preopinante.

Por tales motivos, adhiero al voto del doctor Jiménez en cuanto propone revocar la resolución recurrida y dictar el sobreseimiento del imputado en los términos del artículo 336 inciso 3 del CPPN.

Tal el sentido de mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE:**

HACER LUGAR al recurso de apelación y atento lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, **REVOCAR** la sentencia interlocutoria del 26 de febrero de 2025 y **DISPONER el SOBRESEIMIENTO** de Pedro César Felice, teniendo en



cuenta que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, haciendo saber que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado (artículo 336 inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación).

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUELVA.

Fecha de firma: 19/03/2026

Alta en sistema: 20/03/2026

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: FRANCISCO MANUEL PEREYRA, SECRETARIO



#39842771#492068958#20260318114938578